



Sr. Amilivia González, Presidente

Sr. Rey Martínez, Consejero
Sr. Velasco Rodríguez, Consejero
Sr. Nalda García, Consejero y
Ponente

Sr. Sobrini Lacruz, Secretario

La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 2 de mayo de 2013, ha examinado el *procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada a instancia de ssss*, y a la vista del mismo y tal como corresponde a sus competencias, emite, por unanimidad, el siguiente

DICTAMEN

I

ANTECEDENTES DE HECHO

El día 12 de abril de 2013 tuvo entrada en este Consejo Consultivo la solicitud de dictamen preceptivo sobre el *procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por D. yyyy, en nombre y representación de ssss, debido a los daños sufridos en un accidente por la irrupción de un animal en la calzada.*

Examinada la solicitud y admitida a trámite con fecha 17 de abril de 2013, se procedió a darle entrada en el registro específico de expedientes del Consejo con el número de referencia 295/2013, iniciándose el cómputo del plazo para la emisión del dictamen, tal como dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo de Castilla y León, aprobado por el Decreto 17/2012, de 3 de mayo. Turnado por el Sr. Presidente del Consejo, correspondió su ponencia al Consejero Sr. Nalda García.

Primero.- El 29 de noviembre de 2012 tiene entrada en el registro de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en xxxx1 una reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por D. yyyy, en nombre y representación de ssss, debido a los daños sufridos en el vehículo de su



asegurado, matrícula vvvv, en un accidente ocasionado por la irrupción de un corzo en la calzada.

Expone en su escrito que el día 7 de septiembre de 2012 el vehículo circulaba por la carretera autonómica xx, de xxxx1 a xxxx2, dirección xxxx2, cuando al llegar al punto kilométrico 62,000, término municipal de xxxx3, fue sorprendido por la imprevista irrupción en la calzada de un corzo y, a pesar de frenar, no pudo evitar la colisión con el animal, que resultó muerto. El vehículo sufrió daños materiales.

Adjunta a la reclamación copias del poder general para pleitos; del informe estadístico Arena de la Dirección General de Tráfico elaborado por el Subsector de la Guardia Civil de xxxx1, que señala que el animal procedía del margen derecho de la carretera según el sentido de la marcha del automóvil; del informe pericial de valoración de los daños; de las facturas de reparación del vehículo; de las condiciones particulares de la póliza del seguro; reportaje fotográfico del estado del vehículo tras el siniestro e informe del Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en xxxx1, que señala que los terrenos limítrofes al punto kilométrico 62,000 de la carretera xx están clasificados desde el punto de vista cinegético como vedados, por lo tanto sin aprovechamiento cinegético.

Al producirse el siniestro total del automóvil, reclama como indemnización 2.325,00 euros, que se corresponden con el valor promedio de mercado de vehículos similares al del asegurado, una vez descontados los restos.

Segundo.- El 5 de diciembre el Delegado Territorial acuerda admitir a trámite la reclamación y nombrar instructor del procedimiento.

Tercero.- El 13 de febrero de 2013 el Jefe de la Sección de Conservación y Explotación del Servicio Territorial de Fomento emite informe en el que indica "Que la carretera xx, de xxxx1 a xxxx2 es de titularidad autonómica en todo su recorrido.

»La carretera xx, de xxxx1 a xxxx2 se encuentra en perfecto estado de conservación para su uso a la velocidad específica para la vía (100 Km/H.) excepto en tramos señalizados a menor velocidad como son las travesías, donde la velocidad máxima permitida es de 50 Km/H.



»En la carretera indicada existe la siguiente señalización:

»Señal P-24 (paso de animales en libertad) situadas en el p.k. 61+820, margen derecha con señal complementaria S-810 (longitud del tramo peligroso o sujeto a prescripción en 1.500 metros) colocada el 27 de mayo de 2008.

»Señal P-24 (paso de animales en libertad) situadas en el p.k. 62+800, margen izquierda con señal complementaria S-810 (longitud del tramo peligroso o sujeto a prescripción en 1.500 metros) colocada el 27 de mayo de 2008.

»Panel de atención de paso de animales en libertad con la inscripción modere su velocidad en el p.k. 53+675, margen derecha, colocado en noviembre de 2008”.

Cuarto.- El 7 de marzo el Jefe de la Sección de Vida Silvestre emite informe en el que señala que “(...) al ser un terreno vedado sin aprovechamiento cinegético cabe excluir como causa de accidente la acción de cazar. En cuanto a la conservación corresponde su responsabilidad al propietario del terreno y no a esta Administración. En este sentido el artículo 26.3 de la Ley 4/1996 de la Ley de Caza de Castilla y León, establece la posibilidad de que los propietarios de los terrenos vedados pueden solicitar autorización para efectuar controles de especies cinegéticas a fin de prevenir accidentes en relación con la seguridad vial, autorización que deberá estar motivada, y especificar al menos especies, medios, circunstancias de tiempo y lugar, controles y objetivo o razón de la acción. En el presente caso, no se ha presentado por el titular de los terrenos solicitud de control de especies cinegéticas ni consta documentación que avalase o motivase tal actuación, por lo que no puede atribuirse la responsabilidad a esta Administración”.

Quinto.- Concedido el 11 de marzo trámite de audiencia, la parte reclamante presenta alegaciones en las que se ratifica en lo expuesto en su escrito de reclamación.

Sexto.- El 20 de marzo se formula propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación planteada.



Séptimo.- El 25 de marzo de 2013 la Asesoría Jurídica de la Delegación Territorial de xxxx1 informa favorablemente la propuesta de resolución.

En tal estado de tramitación, se dispuso nuevamente la remisión del expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León para que emitiera dictamen.

II CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1ª.- El Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina en el presente expediente con carácter preceptivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1.h), 1º de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, correspondiendo a la Sección Primera emitir el dictamen según lo establecido en el apartado tercero, 1.f) del Acuerdo de 31 de mayo de 2012, del Pleno del Consejo, por el que se determina la composición y competencias de las Secciones.

2ª.- El procedimiento se ha instruido con arreglo a lo previsto en los artículos 139 a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrollados por el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.

3ª.- Concorre en la parte reclamante los requisitos de capacidad y legitimación exigidos por la referida Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Tal y como dispone el artículo 43 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, "El asegurador, una vez pagada la indemnización, podrá ejercitar los derechos y las acciones que por razón del siniestro correspondieran al asegurado frente a las personas responsables del mismo, hasta el límite de la indemnización".

La competencia para resolver la presente reclamación corresponde al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia, en virtud de lo establecido en los artículos 142.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 16 del Decreto 12/2012, de 29 de marzo, por el que se desconcentran competencias en el titular de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en



los titulares de sus Órganos Directivos Centrales y en los de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León.

La parte reclamante ha ejercitado su derecho en tiempo hábil, de acuerdo con lo establecido en el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4ª.- El artículo 106.2 de la Constitución establece que “Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.

La referencia constitucional a la ley debe entenderse efectuada a los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a la que además se remite el artículo 82.1 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la reiterada doctrina del Consejo de Estado así como la de este Consejo Consultivo, la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.

b) El carácter antijurídico del daño, en el sentido de que la persona que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo, de acuerdo con la ley.

c) La imputabilidad a la Administración de la actividad dañosa, es decir, la integración del agente en el marco de la organización administrativa a la que pertenece o la titularidad pública del servicio o actividad en cuyo ámbito se produce el daño.

d) La relación de causa a efecto entre la actividad administrativa y el resultado dañoso, nexo causal que implica la necesidad de que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público o actividad administrativa en relación directa e inmediata.



e) Ausencia de fuerza mayor.

f) Que no haya transcurrido un año desde el momento en que se produjo el hecho causante.

5ª.- El asunto sometido a consulta versa sobre la reclamación de daños y perjuicios presentada por D. yyyy, en nombre y representación de ssss, debido a los daños sufridos en el vehículo de su asegurado, matrícula vvvv, en un accidente por la irrupción de un corzo en la carretera autonómica xx, kilómetro 62,000, que accedió a la calzada desde el margen derecho según el sentido de la marcha del vehículo.

El corzo tiene la consideración de especie cinegética de caza mayor, tal y como se deduce del anexo del Decreto 65/2011, de 23 de noviembre, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre. Además, se considera pieza de caza, según el artículo 9.1 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, y las órdenes anuales de caza de la Consejería de Medio Ambiente.

De acuerdo con el artículo 12.1 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, "La responsabilidad por los daños producidos por las piezas de caza en los terrenos cinegéticos, en los refugios de fauna y en las zonas de seguridad se determinará conforme a lo establecido en la legislación estatal que resulte de aplicación. La responsabilidad por los accidentes de tráfico provocados por las especies cinegéticas se determinará conforme a la normativa sobre tráfico y seguridad vial vigente".

La legislación estatal de aplicación es la disposición adicional novena de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, texto articulado aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, que establece lo siguiente:

"En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas será responsable el conductor del vehículo cuando se le pueda imputar incumplimiento de las normas de circulación.



»Los daños personales y patrimoniales en estos siniestros, sólo serán exigibles a los titulares de aprovechamientos cinegéticos o, en su defecto, a los propietarios de los terrenos, cuando el accidente sea consecuencia directa de la acción de cazar o de una falta de diligencia en la conservación del terreno acotado.

»También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se produce el accidente como consecuencia de su responsabilidad en el estado de conservación de la misma y en su señalización”.

No consta en el informe estadístico Arena elaborado por la Guardia Civil ni se ha probado por la Administración Autonómica que el conductor del vehículo siniestrado haya infringido las normas de circulación.

Por otra parte, el informe emitido por el Jefe de la Sección de Vida Silvestre el 7 de marzo de 2013, sobre la titularidad cinegética de los terrenos colindantes con el punto kilométrico 62,000 de la carretera xx donde tuvo lugar el accidente, señala que los terrenos existentes a ambos márgenes de la vía desde donde accedió el animal son terrenos vedados y por lo tanto excluidos del aprovechamiento cinegético.

Ha de ponerse de manifiesto que la obligación de la Administración de efectuar controles de especies cinegéticas en los terrenos vedados no es siempre preceptiva (el artículo 26.3 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, emplea el término “podrá”), sino que serán necesarios solamente cuando la situación poblacional del animal (en este caso, el corzo) en esa zona sea lo suficientemente elevada.

Debe recordarse que la carga de la prueba incumbe al reclamante, de acuerdo con los viejos aforismos *necessitas probandi incumbit ei qui agit* y *onus probandi incumbit actori*, con el artículo 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, al señalar que incumbe al actor “la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda (...)”, por remisión del artículo 60.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con lo que, más específicamente para el régimen de la responsabilidad objetiva de la Administración, dispone el artículo 6.1 del



Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.

En este mismo sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid, en el fundamento de derecho sexto de la Sentencia 1.310/2009, señala: "en aplicación del principio de disponibilidad y facilidad probatoria, al actor le incumbe la carga de incorporar a los autos los datos relativos a la siniestralidad por esta causa (Destacamentos de Tráfico de la Guardia Civil) y los que sobre el coto y sus especies cinegéticas obren en los Servicios Territoriales Autonómicos de Medio Ambiente (...), así como la ausencia de medidas visibles o aparentes (...)". La Administración, por su parte, deberá probar los hechos que, en su caso, desvirtúen los alegados.

Pues bien, la parte reclamante no ha probado que concurrieran circunstancias que justificaran la necesidad de efectuar controles de especies cinegéticas, ya que no ha aportado dato alguno sobre la intensidad del paso de animales en libertad por la calzada, la frecuencia de accidentes por atropellos en esa zona u otras que hicieran necesario tales controles (el mero acaecimiento del siniestro no es causa suficiente). Tampoco consta que los propietarios colindantes a los terrenos u otras personas afectadas hayan solicitado dichas actuaciones para hacer disminuir las poblaciones de animales y evitar accidentes.

La responsabilidad de la Administración por los daños ocasionados en estos supuestos no tiene carácter objetivo. En tal sentido, este Consejo Consultivo mantiene que la disposición adicional novena de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial introdujo un sistema de responsabilidad por culpa en los daños producidos en accidentes de circulación por atropello de especies cinegéticas. Así lo considera también el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la Sentencia de 22 de mayo de 2009, cuando señala que, en materia de responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas, "no nos encontramos ante un sistema de responsabilidad objetiva (por la mera producción del daño causado por la sola presencia de una especie cinegética en la calzada), ni de responsabilidad cuasi-objetiva (salvo culpa exclusiva del conductor o fuerza mayor), ni siquiera objetiva atenuada (con presunción de culpa del titular del aprovechamiento cinegético, propietario del terreno, o titular de la vía pública), pues tanto la



existencia del coto como la conducción de un vehículo de motor son susceptibles de generar una situación de riesgo, sino que nos encontramos ante un genuino sistema de responsabilidad por culpa que, de entrada, supone aceptar la posibilidad de que no haya declaración de responsabilidad por no acreditarse culpa o falta de diligencia de alguno de los potenciales intervinientes, y de admitir, por tanto, que existan daños personales y patrimoniales ocasionados en accidentes de tráfico por atropello de especies cinegéticas que no sean indemnizables por no ser exigibles a terceros, lo que en sede contencioso-administrativa se traduce en el deber jurídico de soportar el daño por parte del perjudicado”.

Finalmente, hay que señalar que la parte reclamante no se refiere en su reclamación al estado en que se encontraba la vía donde sucedió el accidente. No obstante, de acuerdo con el informe emitido por el Jefe de la Sección de Conservación y Explotación del Servicio Territorial de Fomento el 13 de febrero de 2013, existía señalización de peligro de animales sueltos anterior al punto del accidente (concretamente existe una señal P-24 con complementaria S-800, durante 1.500 metros, en los kilómetros 62,800 margen izquierda y 53+675 margen derecha, que afecta a su sentido de circulación, colocados en mayo y noviembre de 2008, por lo tanto con antelación a la fecha del accidente) y del informe elaborado por la Guardia Civil de Tráfico se desprende que la superficie de la calzada estaba seca y limpia, por lo que no existía negligencia en la conservación y mantenimiento de la vía por la Administración Pública titular de aquélla.

Por lo expuesto, al no corresponder a la Administración Autonómica la titularidad del aprovechamiento cinegético o de los terrenos y encontrarse la vía en la que sucedió el accidente en buen estado de conservación, no existe título de imputación alguno que permita apreciar la responsabilidad de aquélla por los daños causados. En definitiva, este Consejo considera que no existe relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el daño sufrido, razón por la que la reclamación debe desestimarse.

III CONCLUSIONES

En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla y León informa:



**CONSEJO
CONSULTIVO**
DE CASTILLA Y LEÓN

Procede dictar resolución desestimatoria en el procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por D. yyyy, en nombre y representación de ssss, debido a los daños sufridos en un accidente por la irrupción de un animal en la calzada.

No obstante, V.E. resolverá lo que estime más acertado.